



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 018

Trámite: Conflicto de competencia

Convocante: Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Barbosa

Convocado: Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín

Radicado Único Nacional: 05001 22 03 000 2024 00056 00

Asunto: Dirime conflicto

Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

De conformidad con lo establecido por los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso, procede la suscrita Magistrada a decidir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Barbosa y el Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.

ANTECEDENTES

Edues Fernando Acevedo Villegas, actuando como endosatario en procuración de María Eugenia Mazo Orrego, presentó demanda con pretensión ejecutiva en contra de Cristian Camilo Sánchez Bernal, para lo cual afirmó que éste le adeuda la suma de \$4.000.000, en cuyo respaldo se libró una letra de cambio a su favor. Por tanto, solicitó que se libere mandamiento de pago por ese concepto, más los intereses moratorios causados desde el 1º de diciembre de 2020.

La demanda se presentó ante el Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín, quien mediante proveído de 25 de septiembre de 2023 la inadmitió para que, entre otros, se indicara el domicilio de la parte demandante y demandada, y delimitara *"el fuero por el cual atribuye la competencia territorial, identificando claramente la nomenclatura, barrio y municipio (artículo 28 del C.G.P.)"*.

Presentado en oportunidad el escrito de subsanación, el 1º de diciembre siguiente el juzgado rechazó la demanda *"por falta de competencia territorial"*. Al efecto, consideró que en el libelo se informó que el demandado recibe notificaciones personales en la Calle 48 nro. 45-58 de Medellín – Comando MEVAL, dirección que fue señalada en dicho escrito como su domicilio, pero que, no obstante, en líneas posteriores se afirmó el desconocimiento de la dirección de residencia y que la dirección informada corresponde a la dirección para efectos de notificaciones.

También advirtió que la parte demandante determinó la competencia territorial, en adición al lugar del domicilio del demandado, por el lugar del ***"cumplimiento de la obligación"***, pero que *"en el título base de recaudo ejecutivo, no se estipuló de manera expresa el lugar de aquel cumplimiento"*. (Subrayado propio).

De acuerdo a lo anterior, concluyó que la dirección informada corresponde al lugar donde el demandado recibe notificaciones personales y que, ante el desconocimiento de su domicilio, el fuero por el cual debe atribuirse la competencia por el factor territorial, corresponde al "lugar de domicilio de la demandante" ubicado en el municipio de Barbosa, Antioquia.

Por su parte, una vez recibido el expediente en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Barbosa, rehusó el conocimiento del asunto para lo cual argumentó que a efectos de fijar el juez competente para conocer de la ejecución como la promovida en este caso, pueden concurrir tanto el *fórum domicilii* como el *fórum contractus*, pero ello

definido por el lugar donde el demandante **"haya decidido interponer la acción"**. Así, advirtió que, contrario a lo señalado por el juzgado inicial, el cumplimiento de la obligación, según la letra de cambio aportada, fue fijado en la ciudad de Medellín. La determinación a la que llegó el juzgado remitente se sustentó en una premisa falsa, esto es, que en el documento ejecutado no se había fijado un lugar de cumplimiento.

CONSIDERACIONES

La competencia ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, y tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo el principio de seguridad jurídica.

Ahora, para el caso concreto se nota que la interpretación normativa en discusión está vinculada con el precepto contenido en el numeral 1º y 3º del artículo 28 del CGP, que literalmente regla la determinación de la competencia en el siguiente sentido:

(...) 1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, **es competente el juez del domicilio del demandado** (...).

3. **En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones.**

La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. (...). (Negritas y subrayado propio).

En el asunto objeto de pronunciamiento, no se pasa por alto que de la lectura de la demanda no se podía establecer con claridad cuál de los dos factores de asignación territorial de la competencia escogió la parte demandante toda vez que afirmó que debía asignarse *"[p]or el domicilio de las partes, el lugar del cumplimiento de la obligación"*. Sin embargo, ante el requerimiento efectuado en el auto que inadmitió la demanda para que se señalara el domicilio del demandado, la parte demandante advirtió el desconocimiento de la *"dirección de residencia"*. Lo mismo había señalado en el escrito introductor: *"6. Se*

desconoce la dirección de residencia del demandado, pero conocemos su lugar de trabajo donde podrá ser notificado". Entiéndase, en este caso, se desconoce el lugar de domicilio del demandado.

En esa línea, se tiene entonces que la parte demandante ya había señalado otro factor de competencia: el lugar de cumplimiento de la obligación. Por consiguiente, como lo ha argumentado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

"(...) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes". (CSJ AC2738-2016).

En ese orden, y del análisis de los documentos aportados con la demanda, no queda duda que el lugar de cumplimiento de la obligación, según se advierte claramente de la letra de cambio basilar de la ejecución pretendida, es el municipio de Medellín. No se encuentra ajustado entonces al libelo y a sus anexos la afirmación realizada por el juzgado inicial al señalar que *"en el título base de recaudo ejecutivo, no se estipuló de manera expresa el lugar de aquel cumplimiento"*, pues allí se constata la indicación de que la suma debida se pagará en **Medellín**.

Por ello, es obligado tener en cuenta que el propio numeral 1º del artículo 28 *ibídem* comienza por precisar que la competencia territorial se fija, en principio, por el domicilio del demandando y *salvo disposición legal en contrario*, queriendo ello entonces decir que existen otras circunstancias que fijan competencia por el factor territorial, como lo es aquella regla contenida en el numeral 3º *ibídem*.

Concretamente, se está ante un fuero concurrente por elección. En este caso, el crédito debía ser pagado en el municipio de Medellín, por lo que la decisión

no podría ser distinta a ordenar el trámite del proceso donde fue originalmente presentado, atendiendo a que la parte demandante así lo eligió.

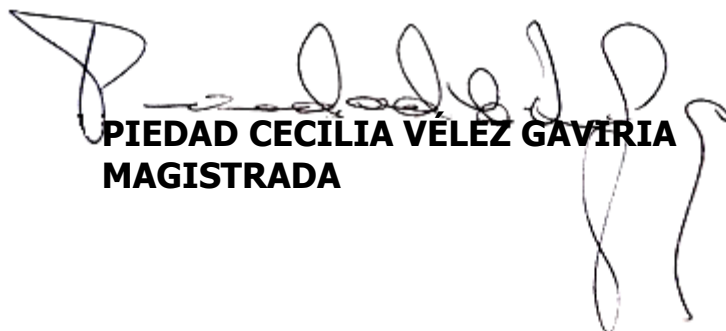
En mérito de lo expuesto la suscrita Magistrada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DIRIMIR la colisión negativa de competencia suscitada, disponiendo que corresponde al **Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín** conocer y decidir el presente asunto.

SEGUNDO: En consecuencia, remítase el expediente al mencionado Despacho, y comuníquese la presente determinación a la parte demandante y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Barbosa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:
Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7103a2e635ff25e7a1195c1e3f9c1197dc1396f932dda356125ad2af9879054c**

Documento generado en 19/02/2024 04:11:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>